

EFFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIALES A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO

EFFECTS OF PROTECTIVE AND ASSISTANCE ORDERS TO VICTIMS OF INTIMATE PARTNER VIOLENCE ON PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

GABRIELA ACURIO^{1,2}, ÁLVARO MONTES³, BLANCA CEA³ Y MERCEDES NOVO³

Cómo referenciar este artículo/How to reference this article:

Acurio, G., Montes, A., Cea, B. y Novo, M. (2023). Efectos de las medidas de protección y asistenciales a víctimas de violencia de género sobre el bienestar psicológico [Effects of Protective and Assistance Orders to Victims of Intimate Partner Violence on Psychological Well-Being]. *Acción Psicológica*, 20(2), 71–88. <https://doi.org/10.5944/ap.20.2.39358>

Resumen

Antecedentes/objetivo: Legalmente se ha proporcionado a los juzgados, como herramienta para evitar la revictimización en casos de violencia de género, la adopción de medidas de protección y asistenciales a víctimas. Sin embargo, los estudios acerca de su eficacia son inconcluyentes, encontrándose efectos no

significativos o de tamaño pequeño. Ahora bien, los efectos sobre los daños psicológicos (victimización) no han sido igualmente estudiados. Se diseñó un estudio de campo para conocer los efectos de estas medidas judiciales, así como de la propia denuncia judicial en el bienestar psicológico de las víctimas. **Método:** Participaron 136 mujeres residentes en Ecuador, que habían concluido un proceso judicial por violencia de género y que respondieron a un listado sobre la aplicación

Correspondence address [Dirección para correspondencia]: Mercedes Novo. Facultade de Psicoloxía. Universidade de Santiago de Compostela, España.

Email: mercedes.novo@usc.es

ORCID: Gabriela Acurio (<https://orcid.org/0009-0002-8115-1697>), Alvaro Montes (<https://orcid.org/0000-0003-4370-4465>), Blanca Cea (<https://orcid.org/0000-0001-9905-2780>) y Mercedes Novo (<https://orcid.org/0000-0002-0942-1501>).

¹ Universidade de Vigo, España.

² Consejo de la Judicatura del Azuay, Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Ecuador.

³ Universidade de Santiago de Compostela, España.

Recibido: 1 de noviembre de 2023.

Aceptado: 23 de noviembre de 2023.

de 17 medidas de protección y asistenciales recogidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Además, se les administró el SCL 90-R para conocer el bienestar psicológico en dos condiciones temporales: medida pre- y post-proceso judicial. **Resultados:** Los resultados advirtieron que sólo seis de las nueve medidas de protección se aplicaron de forma productiva, en tanto que las medidas asistenciales sólo se implementaron de modo trivial (insignificante). Sobre los efectos en el bienestar, los resultados revelaron un efecto significativo para el proceso judicial (denuncia), pero no así para la implementación de medidas de protección, asistenciales, ni para la interacción entre el proceso judicial y la implementación de medidas de protección y asistenciales. Los efectos del factor proceso judicial fueron positivos (mejoría), significativos y de una magnitud grande ($d \geq 0.80$) en *Somatización*, *Obsesivo-Compulsivo*, *Sensibilidad Interpersonal*, *Depresión*, *Ansiedad Generalizada*, *Ansiedad Fóbica* e *Ideación Paranoide*; y con un tamaño del efecto entre moderado y grande ($0.50 \leq d < 0.80$) en las dimensiones *Hostilidad* y *Psicoticismo*. **Conclusiones:** Se discuten las implicaciones de la falta de efecto de la implementación de medidas de protección y asistenciales en el bienestar psicológico, así como los efectos positivos del proceso judicial (denuncia, confrontación con el maltratador) en el bienestar de las denunciantes-víctimas.

Palabras clave: Justicia Terapéutica; Denuncia judicial; Victimización; Toma de decisiones judiciales; Sentencia judicial.

Abstract

Background/Aim: As a tool in order to avoid re-victimization in cases of gender-based violence, the courts have been legally provided with the adoption of protective and assistance orders for victims. Nevertheless, studies about its effectiveness are inconclusive, finding non-significant or small effects. Even so, effects on psychological harm (victimization) have not been equally studied. A field study was designed to find out the effects of these judicial measures, as well as of the judicial complaint itself, about the psychological well-being of the victims. **Method:** 136 women residing in Ecuador whose had completed a judicial process for gender violence and who responded to a

list on the application of 17 protection and assistance orders included in the Ecuadorian legal system participated in the study. In addition, they were administered the SCL 90-R to ascertain their psychological well-being in two temporary conditions: pre- and post-court proceedings. **Results:** The results showed that only six of the nine protection measures were implemented productively, while welfare measures were implemented only trivially (insignificantly). Regarding the effects on well-being, the results revealed a significant effect for the judicial process (denunciation), but not for the implementation of protection and assistance orders, nor for the interaction between the judicial process and the implementation of protection and assistance orders. The effects of the judicial process factor were positive (improvement), significant and of a large magnitude ($d \geq 0.80$) in *Somatization*, *Obsessive-Compulsive*, *Interpersonal Sensitivity*, *Depression*, *Generalized Anxiety*, *Phobic Anxiety*, and *Paranoid Ideation*; and with a moderate to large effect size ($0.50 \leq d < 0.80$) in the *Hostility* and *Psychoticism* dimensions. **Conclusions:** The implications of the lack of effect of the implementation of protective and welfare measures on psychological well-being are discussed, as well as the positive effects of the judicial process (reporting, confrontation with the abuser) on the well-being of complainant-victims.

Keywords: Therapeutic Jurisprudence; Legal complaint; Victimization; Judicial decision making; Judicial sentence.

Introducción

Naciones Unidas (United Nations, 1993) define la violencia de género como todo acto de violencia contra la mujer basado en la pertenencia al sexo femenino que se produzca tanto en la vida pública como la privada. Sin embargo, en Ecuador este fenómeno estaba considerado, en aquel momento, como un problema de índole privada hasta la promulgación de la Ley N° 103/1995 contra la Violencia a la Mujer y a la Familia (1995), impulsada por la declaración de Naciones Unidas, que supuso por primera vez la posibilidad de acceder a la justicia y recibir medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia

de género. De hecho, el anterior Código de Procedimiento Penal (1983) de Ecuador prohibía expresamente la denuncia al cónyuge y familiares ascendentes y descendientes, impidiendo a las víctimas de violencia en la familia acceder a la justicia y dejándolas en una situación de total vulnerabilidad y desamparo.

Actualmente, Ecuador cuenta con la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2018), la cual tiene como objetivo general garantizar la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia, así como de las víctimas indirectas. Esta Ley recoge diferentes medidas destinadas a la protección de las víctimas, como las Acciones Urgentes, que son aplicadas directamente por la Policía Nacional, y las Medidas Inmediatas de Protección, que son solicitadas y aplicadas por las Juntas de Cantonales de Protección de Derechos y Tenencias Políticas, las cuales tienen un carácter inmediato y provisional y tienen por objeto evitar o cesar la amenaza o vulneración de la vida e integridad de las mujeres. Del mismo modo, el Código Orgánico Integral Penal (2014), incluye 12 medidas de protección de aplicación general a víctimas de diferentes delitos, de las cuales algunas de ellas tienen aplicación específica en casos de violencia contra la mujer. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Ecuador dispone del Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y Otros Participantes. Un servicio encargado de gestionar tanto la protección como la asistencia a las víctimas de violencia de género, cuando el juez así lo determine.

Las Órdenes de Protección (OPs) se dirigen a garantizar la integridad y seguridad de las mujeres denunciadas, en tanto las medidas asistenciales (MAS) tienen por objeto prestar apoyo y promover la salud de las víctimas. No obstante, los estudios dirigidos a comprobar la efectividad de las OPs mostraron resultados inconsistentes (Brame et al., 2015). Por un lado, las revisiones que estudiaron el efecto de las OPs y MAS en la reincidencia o revictimización, no encontraron efectos significativos en comparación a cuando no se aplicaron OPs (Brame et al., 2015; Cordier et al., 2021), o bien un efecto de magnitud pequeña (Dowling et al., 2018). Si bien, estudios realizados por Sullivan et al. (2021) revelaron que aquellas OPs más restrictivas lograban una reducción de la victimización significativamente mayor; no controlaron el efecto de la no aplicación de

OPs, por lo que sus resultados son limitados para establecer su efectividad. En todo caso, la literatura coincide en que las OPs no eliminan la revictimización o reincidencia, cifrándose entre el 20-58% de los casos (Brame et al., 2015; Cordier et al., 2021; Dowling et al., 2018; Logan y Walker, 2009; Sullivan et al., 2021; Wright y Johnson, 2012). En lo referido a los efectos de las MAS, la literatura ha informado de una reducción significativa de sintomatología del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT; Sullivan et al., 2021; Wright y Johnson, 2012) y depresiva (Sullivan et al., 2021), aunque estos resultados no son generalizables inter-estudios. Así, otros estudios no hallaron que las MAS mejoraran significativamente la salud mental y bienestar psicológico (Brame et al., 2015; Calton y Cattaneo, 2014).

De cualquier modo, se han encontrado que la victimización por violencia de género se asocia con daños en la salud mental de tipología depresiva (Beydoun et al., 2012; Reyes et al., 2023; Spencer, Mallory et al., 2019; Vilariño et al., 2018; White et al., 2023; World Health Organization, 2013), ansiosa (Reyes et al., 2023; Vilariño et al., 2018; White et al., 2023), ideación e intentos suicidas (McManus et al., 2022; White et al., 2023), consumo de alcohol (World Health Organization, 2013) y, con una menor prevalencia y magnitud de daño, en otros tipos de trastornos psicológicos (Reyes et al., 2023; Vilariño et al., 2018; White et al., 2023). Además, la severidad de esta sintomatología psicológica es elevada, clasificándose un 30% de las mujeres como casos clínicos (Vilariño et al., 2018). Entre estas consecuencias, tienen especial relevancia en el ámbito judicial los ‘Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés (i.e., Trastorno de Estrés Postraumático, Trastorno Adaptativo y Trastorno de Estrés Agudo; APA, 2013); tanto por relacionarse con la victimización por violencia de género (Reyes et al., 2023; Spencer, Mallory et al., 2019; Spencer, Stith y Cafferky, 2019; Vilariño et al., 2018; White et al., 2023), como por suponer la única evidencia válida de daño psicológico en el ámbito legal, al ser el único trastorno que se define en base a su causa y que permite establecer la relación causa-efecto entre los actos delictivos y el daño (Vilariño et al., 2009).

Por otro lado, estudios de campo han confirmado efectos de la victimización por violencia de género en compor-

tamientos negativos, como el aumento de la hostilidad e ira (Clements et al., 2022; Spencer, Stith y Cafferky, 2019; Vilariño et al., 2018). Estas reacciones han servido para explicar las conductas agresivas que muestran algunas mujeres víctimas hacia sus hijos pequeños o en respuesta a sus agresores como un contagio de la conducta hostil de sus maltratadores (Juarros-Basterretxea et al., 2022). Más allá aún, la investigación a nivel forense constató que dichos incrementos en la hostilidad e ira derivan en el maltrato a los hijos menores, concluyendo que, por ser consecuencia de la victimización al ser dos síntomas del TEPT, exime a las mujeres víctimas de violencia de responsabilidad penal (Arce et al., 2009; Bonilla-Algovia y Rivas-Ribero, 2022).

A su vez, se ha corroborado que la participación en el proceso judicial puede tener efectos en la salud psicológica de las víctimas, tal y como establece la Justicia Terapéutica (Therapeutic Jurisprudence, TJ). Este término, propuesto por Wexler y Winick (1996), establece que la ley y la participación en el sistema legal puede tener tanto un papel terapéutico o contraterapéutico, de modo que dependerá de las leyes, procedimientos y actores jurídicos el efecto que la participación en el proceso judicial pueda tener sobre el bienestar de las personas. La TJ tiene como fin último potenciar los efectos terapéuticos y minimizar los contraterapéuticos (Stolle et al., 1997), tratando de humanizar tanto la ley como su aplicación (Novo et al., 2022). El marco de actuación no se reduce a un conjunto de normas escritas, sino que incluye los procedimientos legales y los profesionales que forman parte del proceso (Fariña, 2022). Para ello, la TJ se nutre del conocimiento de las ciencias sociales, jurídicas y del comportamiento, preservando las garantías del proceso legal (Perlin, 2020). La finalidad es el incremento del conocimiento y evidencia científica sobre el proceso legal y, específicamente, sobre la experiencia judicial de las víctimas de violencia de género y el impacto del sistema legal en su bienestar (Sullivan et al., 2022).

Con base en lo expuesto, se diseñó un estudio de campo con el objetivo de conocer y cuantificar los efectos sobre el bienestar psicológico de las denunciantes-víctimas de violencia de género durante el proceso judicial de las órdenes de protección y las órdenes asistenciales previstas en el ordenamiento jurídico del Ecuador.

Método

Participantes

En el estudio participaron un total de 136 mujeres residentes en Ecuador (97.1 % de nacionalidad ecuatoriana) con edades comprendidas entre los 18 y los 72 años ($M = 37.14$, $DT = 10.87$) que habían iniciado un proceso judicial por violencia de género. En cuanto a su estado civil, el 33.8 % de las mujeres ($n = 46$) eran solteras, el 30.9 % ($n = 42$) divorciadas y el 25.7 % ($n = 35$) casadas. La mayoría de las mujeres, 96.3 % ($n = 131$), informaron tener hijos, de las que el 83.2 % ($n = 109$) lo tenían con el denunciado. Por nivel de estudios, el 22.8 % no había completado los estudios básicos, el 12.5 % había cursado estudios básicos, el 14.0 % secundaria, el 31.6 % estudios de grado universitario y el 2.2 % estudios de postgrado.

En cuanto a la relación con el acusado, en el 51.4 % ($n = 70$) de los casos era el ex-marido/marido y en el 48.6 % ($n = 66$) la pareja/conviviente actual o anterior. Por antecedentes judiciales, el 30.9 % de las mujeres ($n = 42$) habían denunciado previamente al acusado por violencia de género, y el 30.9 % ($n = 42$) tenían abierto otro proceso judicial en el ámbito civil (e.g., divorcio, pensión de alimentos).

Diseño y procedimiento

La sensibilidad del diseño para un contraste de la probabilidad observada de productividad de las medidas judiciales con una constante (.05, efecto trivial) para una muestra de 136 sujetos y un tamaño del efecto moderado ($h = 0.50$) fue del 86.9 %. En relación con los análisis multivariados (MANOVA), la probabilidad de detección de diferencias significativas ($\alpha < .05$) para un tamaño muestral de 136 sujetos y un tamaño del efecto moderado ($d = 0.50$) es del 97.8 %.

Las participantes fueron recabadas a través de los servicios y asociaciones de atención a víctimas de violencia de género del Ecuador. Un total de 136 mujeres del Cantón de Cuenca (Ecuador) participaron voluntariamente en el

estudio y prestaron consentimiento informado. Todas las entrevistas fueron realizadas por profesionales con entrenamiento previo y formación específica en Justicia Terapéutica y violencia de género. Las entrevistas se llevaron a cabo entre los meses de diciembre de 2021 y mayo de 2022, el 39 % ($n = 53$) de forma presencial y el restante 61 % ($n = 83$) por medios telemáticos (Zoom, video llamada, WhatsApp). Además, se recogieron datos sociodemográficos y descriptivos del proceso judicial.

Instrumentos de medida

La evaluación de las medidas judiciales aplicadas al caso se obtuvo por medio de una entrevista a las mujeres con un listado de las 17 Órdenes de Protección y las Medidas Asistenciales previstas Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) y la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Ley 175/2018). Dado que las medidas tienen por objeto fines diferentes de protección y asistenciales de las víctimas, tal y como establece el Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y Otros Participantes, pero que en la legislación no están clasificadas como tales, procedimos a ello. Así, definimos las medidas de protección como aquellas dirigidas a mitigar el riesgo de reagravación y las medidas asistenciales como aquellas dirigidas a prestar apoyo y promover la salud de las víctimas. Sobre la base de estas definiciones, un grupo de investigadores evaluó cada medida, siguiendo el procedimiento Thurstone, en una escala de 11 puntos desde medida judicial totalmente protectora (1) a medida totalmente asistencial (1), con un punto medio (6), ni protectora, ni asistencial o ambas a la vez. Además, los investigadores motivaron la evaluación. Se calculó la concordancia en la codificación como protectora o asistencial mediante el índice de concordancia verdadera (\overline{ICV} ; Arce et al., 2000) inter-evaluadores, resultando perfecta ($\overline{ICV} = 1$).

Para evaluar el bienestar psicológico se aplicó la adaptación española del Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R; Derogatis, 2002). Este instrumento se diseñó como una medida de sintomatología psicológica que incluye 90 síntomas distribuidos en nueve dimensiones: *Somatización* (SOM), *Obsesivo-Compulsivo* (OBS), *Susceptibilidad Interpersonal* (INT), *Depresión* (DEP), *Ansiedad* (ANS), *Hostilidad* (HOS), *Ansiedad fóbica* (FOB), *Ideación pa-*

ranoide (PAR) y *Psicoticismo* (PSI). El instrumento tiene un formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos en el que el evaluado informa el nivel de molestia causado por el problema: *Nada en absoluto* (0); *Un Poco* (1); *Moderadamente* (2); *Bastante* (3); *Mucho o extremadamente* (4).

Para el propósito del estudio, se administró a las participantes el SCL 90-R con instrucciones de dos momentos temporales: una medida pre-proceso judicial en la que se situó mentalmente a las entrevistadas en cómo se encontraban antes de iniciar el proceso judicial; y una medida post-proceso judicial, en el que se las instruyó para que respondieran sobre los síntomas en el momento de la evaluación, esto es, tras los efectos del proceso judicial.

Análisis de datos

La productividad de las medidas judiciales se calculó obteniendo la puntuación Z para el contraste entre la prevalencia observada con una prevalencia trivial (.05; Gancedo et al., 2021). El tamaño del efecto con h de Cohen (1988), siendo pequeño ($h = 0.20$), moderado ($h = 0.50$), grande ($h = 0.80$) y más que grande ($h = 1.20$) (Fandiño et al., 2015). Para el estudio de los efectos de la aplicación de medidas protectoras, de medidas asistenciales y del proceso judicial en las dimensiones sintomáticas, se ejecutó un MANOVA 2 X 2 X 2 con un modelo mixto (efectos inter- e intra-sujetos). El análisis multivariado de varianza es robusto cuando se comparan grupos de tamaño igual o aproximadamente iguales, pero puede conllevar desviaciones en la significatividad con grupos de tamaños desiguales, $N_{grande}/N_{pequeña} > 1.5$ (Stevens, 1986). No obstante, a nivel multivariado, la traza de Pillai-Barlett es robusto ante la violación del supuesto de homogeneidad/esfericidad (Olson, 1976). Los tamaños de efecto de los análisis multivariantes se estimaron con eta cuadrado parcial (η_p^2), siendo el tamaño pequeño cuando $\eta_p^2 = .010$, medio cuando $\eta_p^2 = .059$ y grande cuando $\eta_p^2 = .138$ (Cohen, 1988). Observada falta de homogeneidad multivariada, si los resultados univariados eran significativos ($p < .05$) se cotejaba el cumplimiento de tres criterios para su validación (Mayorga et al., 2020): (a) que la F teórica ($F = 3.912$) fuera menor que el valor empírico de F ; (b) que la razón entre el falso rechazo de la hipótesis nula y la falsa aceptación de la hipótesis nula (β/α) sea ≥ 1 ; y (c)

que la magnitud del tamaño del efecto estuviera en línea con la aceptación hipótesis alternativa, esto es, $d \geq 0.20$. En todos los resultados univariados significativos se cumplieron estos tres criterios. El tamaño del efecto univariado para medidas repetidas se obtuvo con d de Cohen aplicando la fórmula de Lipsey y Wilson (2001) y la fórmula de intervalo de confianza Hedges y Olkin's (1985). El tamaño del efecto se interpretó categóricamente como pequeño ($d = 0.20$), moderado ($d = 0.50$) y grande ($d = 0.80$) y se cuantificó la magnitud de la reducción de los síntomas clínicos con r (Arias et al., 2020).

Resultados

Estudio de la productividad de las medidas judiciales

Los resultados de la prevalencia en la implementación de medidas (ver Tabla 1) pusieron de manifiesto una prevalencia significativa y con un tamaño del efecto más que grande de la prohibición al acusado/condenado de concurrir a determinados lugares o reuniones; prohibición de acercarse a la víctima; prohibición de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima; y extensión de una

Tabla 1

Frecuencia y productividad en la aplicación de las medidas judiciales

Medidas judiciales	F(p)	Z _α	p	h[IC 95%]
Medidas de protección				
Prohibición de concurrir a determinados lugares o reuniones	86(.623)	30.66	.001	1.94[1.86, 2.02]
Prohibición de acercarse a la víctima, testigos u otras personas	92(.676)	33.50	.001	2.09[2.01, 2.17]
Prohibición de realizar actos de persecución o de intimidación	86(.632)	30.66	.001	1.94[1.86, 2.02]
Extensión de una boleta de auxilio (salvoconducto)	126(.926)	46.87	.001	3.03[2.97, 3.09]
Orden de abandono de la vivienda	27(.199)	7.97	.001	0.47[0.41, 0.53]
Inserción de la víctima, en un programa de protección	3(.022)	-1.50	.067	-0.21[-0.24,-0.18]
Prohibición al acusado/condenado de esconder, trasladar, cambiar la residencia o lugar de domicilio, a sus hijas o hijos	1(.007)	-2.31	.010	-0.40[-0.43, -0.37]
Instalación de dispositivos de alerta y riesgo	29(.213)	8.72	.001	0.72[0.66, 0.78]
Disposición de seguimiento de las conductas de violencia	1(.007)	-2.31	.010	-0.40[-0.43, -0.37]
Prohibición al acusado/condenado de ocultar o retener bienes o documentos de propiedad de la víctima	0(.000)	----	----	----
Suspensión de actividades desarrolladas por el acusado/condenado en instituciones deportivas, artísticas, de cuidado o de educación	0(.000)	----	----	----
Medidas asistenciales				
Privación de la custodia de los hijos con discapacidad	3(.022)	-1.50	.067	-0.21[-0.24,-0.18]
Orden de tratamiento de la víctima y sus hijos	8(.059)	0.48	.361	0.06[0.04, 0.08]
Inventario de los bienes muebles o inmuebles	0(.000)	----	----	----
Fijación de una pensión	6(.044)	-0.32	.626	-0.04[-0.05, -0.03]
Disposición de flexibilidad o reducción del horario laboral	0(.000)	----	----	----

Nota. **f(p)**: frecuencia (proporción observada); **Z**: puntuación zeta para la diferencia entre la probabilidad observada y una constante (prevalencia trivial, .05); **h[IC 95%]**: tamaño del efecto h de Cohen [Intervalo de Confianza del 95%].

boleta de auxilio (salvoconducto) a favor de la víctima o su entorno. También se observó una prevalencia significativa y con un tamaño del efecto moderado en la medida judicial orden de abandono al acusado/condenado de la vivienda o morada y la instalación de dispositivos electrónicos. Todas ellas de protección de la víctima. Por el contrario, las medidas asistenciales se han implementado con una prevalencia trivial o nula.

Estudio de los efectos de las medidas judiciales

Se ejecutó un MANOVA con un diseño mixto 2 (efecto intra-sujeto: proceso judicial) X 2 (efectos inter-sujetos: implementación de medidas de protección) X 2 (efecto inter-sujetos: implementación de medidas asistenciales), con un modelo personalizado (efectos principales para los factores proceso judicial –denuncia, confrontación con el agresor–, implementación de medidas judiciales de protección, e implementación de medias judiciales asistenciales; y la interacción del factor proceso judicial con los factores implementación de medidas judiciales de protección e implementación de medidas judiciales asistenciales). Los resultados informaron de un efecto multivariado significativo, $F(9, 125) = 3.37, p = .001$, del factor proceso judicial (intra-sujeto), con una potencia observada del 98.1 %, $1-\beta = .981$, y un tamaño del efecto grande ($\eta_p^2 = .195$). Por su parte, los factores inter-sujetos aplica-

ción de medidas de protección (sí vs. no), $F(9, 125) = 1.01, p = .453$, y asistenciales (sí vs. no), $F(9, 125) = 0.99, p = .453$, no evidenciaron tener un efecto significativo en el ajuste psicológico. Asimismo, la interacción entre proceso judicial (efectos intra-sujeto) y la aplicación de medidas de protección (efectos inter-sujetos), $F(9, 125) = 1.45, p = .173$, y la aplicación de medidas asistenciales a la víctima, $F(9, 125) = 1.37, p = .211$, tampoco resultaron significativas. Es decir, la aplicación de medidas de protección y asistenciales a la víctima son independientes del efecto del proceso judicial.

Los efectos univariados (ver Tabla 2) para factor proceso judicial mostraron un efecto clínico positivo (mejora clínica) y significativo y con un tamaño del efecto grande ($d \geq 0.80$) en *Somatización*, *Obsesivo-Compulsivo*, *Sensibilidad Interpersonal*, *Depresión*, *Ansiedad* (ansiedad generalizada), *Ansiedad Fóbica* e *Ideación Paranoide*; y con un tamaño del efecto entre moderado y grande ($0.50 \leq d < 0.80$) en las dimensiones *Hostilidad* y *Psicoticismo*. En términos terapéuticos, estos efectos suponen una mejora (disminución de síntomas) del 41.4 % ($r = .414$) en *Somatización*, del 44.4 % ($r = .444$) en *Obsesivo-Compulsivo*, del 38.7 % ($r = .387$) en *Sensibilidad Interpersonal*, del 45.4 % ($r = .454$) en *Depresión*, del 47.5 % ($r = .475$) en *Ansiedad*, del 30.0 % ($r = .300$) en *Hostilidad*, del 38.3 % ($r = .383$) en *Ansiedad Fóbica*, del 42.5 % ($r = .425$) en *Ideación Paranoide*, y del 32.6 % ($r = .326$) en *Psicoticismo*.

Tabla 2

Effectos univariados en las dimensiones sintomáticas (bienestar psicológico) para el factor proceso judicial (pre-juicio vs. post-juicio). Efectos intra-sujetos

Dimensión sintomatológica	F	p	M _{pre}	M _{post}	d[IC 95%]	β/α
Somatización	14.30	< .001	1.87	0.84	0.91[0.87, 0.95]	> 36
Obsesivo-Compulsivo	16.68	< .001	2.18	1.01	0.99[0.95, 1.03]	> 18
Sensibilidad Interpersonal	14.23	< .001	2.16	0.90	0.84[0.80, 0.88]	> 37
Depresión	17.68	< .001	2.91	1.20	1.02[0.98, 1.06]	> 13
Ansiedad	23.00	< .001	2.63	1.00	1.08[1.04, 1.12]	> 3
Hostilidad	5.34	.022	1.40	0.64	0.63[0.59, 0.67]	16.64
Ansiedad Fóbica	5.38	.022	2.06	0.79	0.83[0.79, 0.87]	16.64
Ideación Paranoide	6.45	.012	1.95	0.89	0.94[0.90, 0.98]	29.92
Psicoticismo	6.19	.014	0.99	0.40	0.69[0.65, 0.73]	21.79

Nota. $g(1, 133)$; M_{pre}: Media del grupo de víctimas previo al proceso judicial; M_{post}: Media del grupo de víctimas posterior al proceso judicial o en la actualidad; d[IC 95%]: tamaño del efecto d [Intervalo de Confianza del 95%].

Discusión

En primer lugar, el estudio permite confirmar el efecto reparador y terapéutico sobre las mujeres denunciantes de violencia de género de hacer frente al agresor por medio del proceso judicial, produciéndose una mejora significativa y de magnitud grande en su bienestar. Este efecto se produce tanto a nivel global de salud mental, con una magnitud grande, como en todas las escalas de sintomatología estudiadas, con tamaños del efecto entre moderados y grandes; especialmente en las dimensiones de sintomatología depresiva, ansiosa y obsesivo-compulsiva, las cuales incluyen síntomas del TEPT (e.g., reexperimentación, alteraciones cognitivas negativas, alteraciones del estado de ánimo, aumento de la activación; APA, 2013). La psicología forense identifica el daño psicológico por medio del TEPT (Arce et al., 2015), caracterizado por la recurrencia e intensificación con el tiempo de su sintomatología, con tendencia a cronificarse como respuesta a recuerdos al trauma original o nuevos estresores; por lo que todos aquellos factores que supongan una reducción de la sintomatología y que contribuyan a superar la experiencia traumática serán de especial relevancia. Estos resultados concuerdan con estudios previos que concluyen acerca de la mejora del estado de salud y calidad de vida (Cattaneo y Goodman, 2010) de las mujeres tras acudir al sistema judicial, especialmente cuando los operadores jurídicos actúan con enfoque de TJ. Además, se constata una reducción de magnitud moderada y mayor al 38% de la dimensión de hostilidad, en línea con lo encontrado en investigaciones previas (Clements et al., 2022; Vilariño et al., 2018). Así, la victimización de violencia de género puede incrementar las conductas hostiles y agresivas de las mujeres, que pueden dirigirse a los hijos menores o al agresor; lo cual explicaría la frecuencia de maltrato a los hijos durante el proceso de victimización (Arce et al., 2009; Bonilla-Algovia y Rivas-Ribero, 2022), pero que ciertamente ocurre como una consecuencia de su victimización.

En segundo lugar, se concluye que la aplicación de Órdenes de Protección no tiene un efecto significativo en la salud y bienestar de las víctimas de violencia de género. Este resultado contribuye a arrojar luz sobre los resultados contradictorios existentes acerca de las OP, que concluían en línea con la falta de efectos significativos o efectos de tamaño pequeño, en comparación con cuando no se apli-

caban (Brame et al., 2015; Cordier et al., 2021; Dowling et al., 2018; Calton y Cattaneo, 2014). Una explicación posible a los resultados obtenidos por Sullivan et al. (2021), es que en sus estudios se dirigen a la comparación de diferentes niveles de restricción, pero no tienen en cuenta la comparación con la no aplicación de las OPs, ni controlan los efectos del propio proceso judicial, a diferencia del presente estudio. Por otra parte, es posible que las OPs se relacionen con otras variables del proceso como la experiencia subjetiva, la capacidad de elección, la percepción de justicia o el empoderamiento (Calton y Cattaneo, 2014; Cattaneo y Goodman, 2010; Holmes et al., 2021; Sullivan et al., 2022).

Por lo tanto, los resultados revelan la importancia de la experiencia de las mujeres que denuncian violencia de género durante el proceso judicial, en relación con su bienestar y a fomentar una experiencia positiva donde se potencien sus efectos terapéuticos (Arce et al., 2023). Esta finalidad es la que persigue la Justicia Terapéutica (TJ), la cual destaca que este efecto terapéutico o contraterapéutico del proceso judicial recaerá no solo en las leyes, sino en cómo se aplican los procedimientos y en cómo actúan los profesionales del sistema legal (Fariña, 2022; Wexler y Winick, 1996). Un proceso judicial en el cual se actúa con enfoque de TJ, permitirá un mejor afrontamiento por parte de la víctima, un menor abandono, por lo que será probable que se produzcan beneficios significativos en las víctimas (Cattaneo y Godman, 2010). Del mismo modo, debe mencionarse el papel que pueda tener el empoderamiento (Rappaport, 1984), definido como el proceso por el cual las personas adquieren control de sus vidas. La literatura informa que el empoderamiento es un factor mediador entre la calidad de vida de las víctimas y la finalización del proceso judicial (Cattaneo y Godman, 2010). De este modo, una actuación en contexto judicial que dé voz a las mujeres (Anderson et al., 2015) y fomente la participación activa, dándoles capacidad de elección durante el proceso, en línea con la *survivor-defined practice* (Goodman et al., 2016), podrían fomentar los efectos terapéuticos del mismo.

En tercer lugar, los resultados acerca de la aplicación de OP definidas en la jurisprudencia de Ecuador (COIP, 2014; Ley 175/2018); permiten concluir que únicamente 6 de las 17 OP se aplican de forma significativa, con tama-

ños del efecto entre moderado y más que grandes. Todas las medidas significativas corresponden a la categoría de medidas de protección, es decir, aquellas aplicadas para mitigar el riesgo de reagrésión. Sin embargo, no se constató la aplicación significativa de ninguna medida asistencial, es decir aquellas dirigidas a restituir el daño recibido y facilitar el sustento de las denunciadas. Esto supone que la aplicación de las OP en Ecuador se está dirigiendo de forma exclusiva a aquellas medidas que tratan de evitar la reincidencia y nuevos episodios de violencia, pese a que las investigaciones informan que son incapaces de mitigar por completo la reincidencia y revictimización (Brame et al., 2015; Cordier et al., 2021; Dowling et al., 2018; Logan y Walker, 2009). A este respecto, se ha destacado (Blondé et al., 2023) que una aplicación inadecuada de OP puede poner en riesgo a las mujeres, propiciando el abandono del proceso judicial, exponiéndolas a riesgo de revictimización en futuras experiencias traumáticas y, con ello, impidiendo un adecuado afrontamiento de la situación.

Dentro de las medidas asistenciales, únicamente una de ellas (fijación de una pensión) tiene un propósito económico directo y dos de ellas (inventario de los bienes muebles o inmuebles y disposición de flexibilidad o reducción del horario laboral) tienen implicaciones en el sustento económico de las denunciadas, no aplicándose de forma significativa ninguna de ellas. Esto resulta especialmente relevante ya que la independencia económica se ha resaltado como un aspecto fundamental para la erradicación de la violencia hacia la mujer, mencionándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (United Nations, 2015). Este tipo de medidas, encuadradas en medidas asistenciales, podrían facilitar la toma acciones legales y reducir el abandono durante el proceso, tal y como establece la teoría de la dependencia marital (Kalmuss y Straus, 1982), según la cual aquellas situaciones donde existe dependencia económica hacia el cónyuge o pareja impiden a las víctimas el abandonar la relación y, por lo tanto, perpetúa su victimización. Estos supuestos son apoyados por el metaanálisis llevado a cabo por Eggers y Steinert (2022), en el que se concluye que las mujeres empoderadas económicamente tienen una menor victimización de violencia de género tanto emocional, como sexual y físico. En consecuencia, el desarrollo de medidas asistenciales de tipo económico y que permitan el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, coadyuva al abandono de la relación de

dependencia y a poder participar en el proceso judicial sin perder el sustento económico.

No obstante, deben tenerse en cuenta las limitaciones con las que cuenta este estudio. En primer lugar, la evaluación del estado psicológico previo al proceso judicial se realizó reinstaurando mentalmente a la entrevistada en ese momento temporal, lo que puede afectar a los resultados. Por otro lado, las comparaciones se hacen entre grupos generados de manera natural, en base a la aplicación o no aplicación de las medidas de protección, por lo que no se comparan grupos equivalentes, aunque se ha tratado de controlar el efecto de la posible ausencia de esfericidad sobre los resultados. Asimismo, el efecto de alguna de las medidas de protección, aunque pudieran ser relevantes, no pudo ser evaluado por la baja frecuencia de aplicación de esta medida, que no supera la presencia trivial. Por último, debe tenerse en cuenta que el trabajo se realiza en el contexto social y legal de Ecuador, por lo que los resultados obtenidos se refieren únicamente a las medidas incluidas en su legislación.

Financiamiento: Esta investigación fue financiada en parte por el proyecto “Desarrollo y bienestar de las mujeres víctimas de violencia de género desde la Justicia Terapéutica”. Proyectos de investigación en materia de cooperación para el desarrollo en el marco de la Agenda 2030. Cooperación Gallega. Xunta de Galicia (Código: PR815A2021/13); por una ayuda a Álvaro Montes del Ministerio de Universidades en el programa "Formación de Profesorado Universitario" (Código: FPU20/02169); y por una ayuda a Blanca Cea del Ministerio de Ciencia e Innovación (Código PRE2021-100192).

Consejo de Revisión Institucional: Este estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela (Código: USC-20/2020).

Consentimiento informado: Se obtuvo consentimiento informado de todos los participantes incluidos en el estudio.

Declaración de disponibilidad de datos: El acceso a la fuente de datos de este estudio está restringida a la aprobación judicial.

Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no hay conflicto de intereses.

Referencias

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5ª ed.). Autor.
- Anderson, K. L. (2015). Victims' Voices and Victims' Choices in Three IPV Courts. *Violence against Women*, 21(1), 105–124. <https://doi.org/10.1177/1077801214564166>
- Arce, R., Fariña, F., Carballal, A. y Novo, M. (2009). Creación y validación de un protocolo de evaluación forense de las secuelas psicológicas de la violencia de género [Creation and Validation of a Forensic Protocol to Assess Psychological Harm in Battered Women]. *Psicothema*, 21(2), 241–247. <http://www.psicothema.com/pdf/3621.pdf>
- Arce, R., Fariña, F. y Fraga, A. (2000). Género y formación de juicios en un caso de violación [Gender and Juror Judgment Making in a Case of Rape]. *Psicothema*, 12(4), 623–628. <http://www.psicothema.com/pdf/381.pdf>
- Arce, R., Fariña, F., Novo, Seijo, D., M., Cárdenas, D. y Acurio, G. (2023). Aplicación de la Justicia Terapéutica en Ecuador: Visión de las víctimas de violencia de género. *Revista Iberoamericana de Justicia Terapéutica*, 6, IJ-IV-XCII-260. <https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=68d9acc28445db90c22d151e45e103c2>
- Arce, R., Fariña, F. y Vilariño, M. (2015). Daño psicológico en casos de víctimas de violencia de género: Estudio comparativo de las evaluaciones forenses [Psychological Injury in intimate Partner Violence Cases: A Contrastive Analysis of Forensic Measures]. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 6(2), 72–80. <https://doi.org/10.1016/j.rips.2015.04.002>
- Arias, E., Arce, R., Vázquez, M. J. y Marcos, V. (2020). Treatment Efficacy on the Cognitive Competence of Convicted Intimate Partner Violence Offenders. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 36(3), 427–435. <https://doi.org/10.6018/analesps.428771>
- Beydoun, H. A., Beydoun, M. A., Kaufman, J. S., Lo, B. y Zonderman, A. B. (2012). Intimate Partner Violence Against Adult Women and its Association with Major Depressive Disorder, Depressive Symptoms, and Postpartum Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Social Science & Medicine*, 75(6), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.04.025>
- Blondé, A., Altan, L., Boychenko, O. y Van Den Heuvel, L. (2023). *Safe Justice for Victims of Crime: Discussion Paper*. Justice Programme of the European Union.
- Bonilla-Algovia, E. y Rivas-Rivero, E. (2022). Papel del sexismo, los mitos románticos y los eventos vitales adversos en la violencia de género: Un estudio con agresores de pareja [Traditional Schemes of Sexual Gender Roles, Power in Relationships and Dating Violence]. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 13(2), 112–119. <https://doi.org/10.23923/j.rips.2022.02.05>
- Brame, R., Kaukinen, C., Gover, A. R. y Lattimore, P. K. (2015). No-contact Orders, Victim Safety, and Offender Recidivism in Cases of Misdemeanor Criminal Domestic Violence: A Randomized Experiment. *American Journal of Criminal Justice*, 40(2), 225–249. <https://doi.org/10.1007/s12103-014-9242-x>
- Calton, J. y Cattaneo, L. B. (2014). The effects of Procedural and Distributive Justice on Intimate Partner Violence Victims' Mental Health and Likelihood of Future Help-Seeking. *American Journal of Orthopsychiatry*, 84(4), 329–340. <http://dx.doi.org/10.1037/h0099841>
- Cattaneo, L. B. y Goodman, L. A. (2010). Through the Lens of Therapeutic Jurisprudence: The Relationship between Empowerment in the Court System and Well-Being for Intimate Partner Violence Victims. *Journal of Interpersonal*

- Violence*, 25(3), 481–502. <https://doi.org/10.1177/0886260509334282>
- Clements, C. M., Moore, B. C., Laajala-Lozano, A. y Casanave, K. (2022). Victim and Perpetrator Acknowledgement of Intimate Partner Violence and Victim Psychopathology. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(19-20), 1–23. <https://doi.org/10.1177/08862605211028289>
- Código Orgánico Integral Penal. (2014, Febrero 10). *Registro Oficial*, 10(Sup. 180). <https://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/3700/0/3427/1/C%c3%b3digo%20Org%c3%a1nico%20Integral%20Penal.pdf>
- Cohen, J. B. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2ª ed.). LEA.
- Cordier, R., Chung, D., Wilkes-Gillan, S. y Speyer, R. (2021). The Effectiveness of Protection Orders in Reducing Recidivism in Domestic Violence: A Systematic Review and Meta-analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 22(4), 804–828. <https://doi.org/10.1177/1524838019882361>
- Derogatis, L. R. (2002). *SCL-90-R. Manual*. TEA.
- Dowling, C., Morgan, A., Hulme, S., Manning, M. y Wong, G. (2018). Protection Orders for Domestic Violence: A Systematic Review. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, 551, 1-19. https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi55_1
- Eggers, I. y Steinert, J. I. (2022). The Effect of Female Economic Empowerment Interventions on the Risk of Intimate Partner Violence: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 23(3), 810–826. <https://doi.org/10.1177/1524838020976088>
- Fandiño, R., Basanta, J., Sanmarco, J., Arce, R. y Fariña, F. (2021). Evaluation of the Executive Functioning and Psychological Adjustment of Child to Parent Offenders: Epidemiology and Quantification of Harm. *Frontiers in Psychology*, 12, Artículo 616855. <https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2021.616855>
- Fariña, F. (2022). Justicia terapéutica: Humanizando la justicia, de la teoría a la práctica. En E. Vázquez y L. García Villaluenga (eds.), *Habilidades y procedimientos de la mediación* (pp. 419–448). Thomson Reuters Aranzadi.
- Gancedo, Y., Fariña, F., Seijo, D., Vilariño, M. y Arce, R. (2021). Reality Monitoring: A Meta-Analytical Review for Forensic Practice. *European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 13(2), 99–110. <https://doi.org/10.5093/ejpalc2021a10>
- Goodman, L. A., Thomas, K., Cattaneo, L. B., Heimel, D., Woulfe, J. y Chong, S. K. (2016). Survivor-Defined Practice in domestic Violence Work: Measure Development and Preliminary Evidence of Link to Empowerment. *Journal of Interpersonal Violence*, 31(1), 163–185. <https://doi.org/10.1177/0886260514555131>
- Hedges, L. V. y Olkin, I. (1985). *Statistical Methods for Meta-Analysis*. Academic Press.
- Holmes, S. C., Maxwell, C. D., Cattaneo, L. B., Bellucci, B. A. y Sullivan, T. P. (2021). Criminal Protection Orders among Women Victims of Intimate Partner Violence: Women’s Experiences of Court Decisions, Processes, and their Willingness to Engage with the System in the Future. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(17-18), 16253–16276. <https://doi.org/10.1177/08862605211021965>
- Juarros-Basterretxea, J., Ocampo, N. Y., Herrero, J. y Rodríguez-Díaz, F. J. (2022). Dyadic Analysis of Emotional Intimate Partner Violence: An Estimation of Dyadic Patterns and Influencing Individual, Relational, and Couple Factor. *European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 14(2), 105–111. <https://doi.org/10.5093/ejpalc2022a10>

- Kalmuss, D. S. y Straus, M. A. (1982). Wife's Marital Dependency and Wife Abuse. *Journal of Marriage and the Family*, 44(2), 277–286. <https://doi.org/10.2307/351538>
- Ley N° 103/1995 contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. (1995, Diciembre 11). *Registro Oficial*, No. 839. https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ley_103-1995.pdf
- Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. (2018, Febrero 5). *Registro Oficial*, Suplemento No. 175. <https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionanameuid-29/Leyes%202013-2017/361-errad-violencia-contra-mujeres-18-08-2017/ro-contra-violencia-mujer.pdf>
- Lipsey, M. W. y Wilson, D. B. (2001). *Practical Meta-analysis*. Sage.
- Logan, T. K. y Walker, R. (2009). Civil Protective Order Outcomes: Violations and Perceptions of Effectiveness. *Journal of Interpersonal Violence*, 24(4), 675–692. <https://doi.org/10.1177/0886260508317186>
- Mayorga, E. G., Novo, M., Fariña, F. y Arce, R. (2020). Destrezas cognitivas en menores infractores, de protección y normalizados: Un estudio de contraste [Cognitive Skills in Juvenile Offenders, Protection Normalized Youngsters: A Contrastive Study]. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 52, 160–168. <https://doi.org/10.14349/rlp.2020.v52.16>
- McManus, S., Walby, S., Barbosa, E. C., Appleby, L., Brugha, T., Bebbington, P. E., Cook, E. A. y Knipe, D. (2022). Intimate Partner Violence, Suicidality, and self-Harm: A Probability Sample Survey of the General Population in England. *Lancet Psychiatry*, 9(7), 574–583. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(22\)00151-1](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00151-1)
- Novo, M., Alonso, M. y Fariña, F. (2022). Percepción de justicia y empoderamiento en mujeres víctimas de violencia de género. En I. Loinaz, J. Sanmarco, y V. Marcos (eds.), *XIV Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Libro de Actas* (pp. 343–346). Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense. http://sepjf.org/wp-content/uploads/2019/03/libro-de-actas_xiv-congreso-internacional-de-psicologia-juridica-y-forense.pdf
- Olson, C. L. (1976). On Choosing a Test Statistic In Multivariate Analysis of Variance. *Psychological Bulletin*, 83(4), 579–586. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.83.4.579>
- Perlin, M. L. (2020). ¿Has visto a la dignidad?: La historia del desarrollo de la Justicia Terapéutica. En D. B. Wexler, M. S. Oyhamburu y F. Fariña (eds.), *Justicia Terapéutica: Un nuevo paradigma legal* (pp. 25–57). Wolters Kluwer.
- Rappaport, J. (1984). Studies of Empowerment: Introduction to the Issue. *Prevention in Human Issue*, 3(2-3), 1–7. https://doi.org/10.1300/J293v03n02_02
- Reyes, M., Simpson, L., Sullivan, T., Contractor, A. y Weiss, N. (2023). Intimate Partner Violence and Mental Health Outcomes among Hispanic Women in the United States: A Scoping Review. *Trauma, Violence & Abuse*, 24(2), 809–827. <https://doi.org/10.1177/15248380211043815>
- Spencer, C., Mallory, A. B., Cafferky, B. M., Kimmes, J. G., Beck, A. R. y Stith, S. M. (2019). Mental Health Factors and Intimate Partner Violence Perpetration and Victimization: A Meta-analysis. *Psychology of Violence*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.1037/vio0000156>
- Spencer, C., Stith, S. M. y Cafferky, B. (2019). Risk Markers for Physical Intimate Partner Violence Victimization: A Meta-Analysis. *Aggression and*

- Violent Behavior*, 44, 8–17. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.10.009>
- Stevens, J. (1986). *Applied Multivariate Statistics for Social Sciences*. LEA.
- Stolle, D. P., Wexler, D. B., Winick, B. J. y Dauer, E. A. (1997). Integrating Preventive Law and Therapeutic Jurisprudence: A Law and Psychology Based Approach to Lawyering. *California Western Law Review*, 34(1), 15–51. <https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwlr/vol34/iss1/3>
- Sullivan, T. P., Weiss, N. H., Woerner, J., Wyatt, J. y Carey, C. (2021). Criminal Orders of Protection for domestic violence: Associated Revictimization, Mental Health, and Well-Being Among Victims. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(21-22), 10198–10219. <https://doi.org/10.1177/0886260519883865>
- Sullivan, T. P., Weiss, N. H., Woerner, J. y Belliveau, D. (2022). Criminal Protection Orders: Implications of Requested versus Issued Orders on Domestic Violence Revictimization and Mental Health among Women. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(19-20), 18445–18464. <https://doi.org/10.1177/08862605211035875>
- United Nations. (1993). *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*. Autor. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/eliminativaw.pdf>
- United Nations. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Autor. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Vilariño, M., Fariña, F. y Arce, R. (2009). Discriminating Real Victims from Feigners of Psychological Injury in Gender Violence: Validating a Protocol for Forensic Setting. *European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 1(2), 221–243. http://sepjf.webs.uvigo.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=19&Itemid=110&lang=es
- Vilariño, M., Vázquez, M. J., González Amado, B. y Arce, R. (2018). Psychological Harm in Women Victims of Intimate Partner Violence: Epidemiology and Quantification of Injury in Mental Health Markers. *Psychosocial Intervention*, 27(3), 145–152. <https://doi.org/10.5093/pi2018a23>
- Wexler, D. y Winick, B. J. (1996). *Law in a Therapeutic Key: Developments in Therapeutic Jurisprudence*. Carolina Academic Press.
- White, S., Sin, J., Sweeney, A., Salisbury, T., Wahlich, C., Camila-Margarita, M., Gillard, S., Brett, E., Allwright, L., Iqbal, N., Khan, A., Perot, C., Marks, J. y Mantovani, N. (2023). Global Prevalence and Mental Health Outcomes of Intimate Partner Violence Among Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(1), 494–511. <https://doi.org/10.1177/15248380231155529>
- World Health Organization. (2013). *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Impacts of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*. Autor. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
- Wright, C. V. y Johnson, D. M. (2012). Encouraging Legal Help Seeking for Victims of intimate Partner Violence: The Therapeutic Effects of the Civil Protection Order. *Journal of Traumatic Stress*, 25(6), 675–681. <https://doi.org/10.1002/jts.21754>

EFFECTS OF PROTECTIVE AND ASSISTANCE ORDERS TO VICTIMS OF INTIMATE PARTNER VIOLENCE ON PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

GABRIELA ACURIO, ÁLVARO MONTES, BLANCA CEA Y
MERCEDES NOVO

EXTENDED SUMMARY

Introduction

Currently, Ecuador has the Comprehensive Organic Law for the Prevention and Eradication of Violence against Women (2018), which has the general aim of guaranteeing the integrity and safety of women victims of violence, as well as indirect victims. Similarly, the Comprehensive Organic Criminal Code (2014) includes 12 protective orders of general application to victims of different crimes, some of which have specific application in cases of violence against women. On the other hand, the Attorney General's Office of Ecuador has the National System for the Protective and Assistance of Victims, Witnesses and Other Participants. A service in charge of managing both protective and assistance to victims of intimate partner violence when the judge so determines.

Protective Orders (POs) aim to guarantee the integrity and safety of women complainants, while Assistance Orders (AOs) aim to support and promote the victim's health. Nevertheless, studies aimed at testing the effectiveness of POs showed inconsistent results (Brame et al., 2015). In any case, literature agrees that POs do not eliminate re-victimization or recidivism, ranging from 20-58% of cases (Brame et al., 2015; Cordier et al., 2021; Dowling et al., 2018; Logan & Walker, 2009; Sullivan et al., 2021; Wright & Johnson, 2012). In terms of the effects of AOs, the literature has reported a significant reduction in Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD; Sullivan et al., 2021; Wright & Johnson, 2012) and depressive symptomatology (Sullivan et al., 2021), although these results are not generalisable across studies.

Intimate partner violence victimization has been found to be associated with mental health harms of depressive (Beydoun et al., 2012; Reyes et al., 2023; Spencer, Mallory et al., 2019; Vilariño et al., 2018; White et al., 2023; World Health Organization, 2013), anxious (Reyes et al., 2023; Vilariño et al., 2018; White et al., 2023), suicidal ideation and attempts (McManus et al., 2022; White et al., 2023), alcohol use (World Health Organization, 2013) and, with lower prevalence and magnitude of harm, in other types of psychological disorders (Reyes et al., 2023; Vilariño et al., 2018; White et al., 2023). Furthermore, severity of this psychological symptomatology is high, with 30% of women being classified as clinical cases (Vilariño et al., 2018). Among these consequences, 'Trauma-related disorders and stressors (i.e., Post-Traumatic Stress Disorder, Adaptive Disorder and Acute Stress Disorder; APA, 2013) are of special relevance in the judicial field; both for being related to intimate partner violence victimization (Reyes et al., 2023; Spencer, Mallory et al., 2019; Spencer, Stith, & Cafferky, 2019; Vilariño et al., 2018; White et al., 2023), and as the only one valid evidence of psychological harm in the legal setting (Vilariño et al., 2009).

On the other hand, field studies have confirmed effects of intimate partner violence victimization on negative behaviours, such as increased hostility and anger (Clements et al., 2022; Spencer, Stith, & Cafferky, 2019; Vilariño et al., 2018). These reactions have been used in order to explain the aggressive behaviours displayed by some female victims towards their young children or in response to their abusers as a contagion of the hostile behaviour of their abusers (Juarros-Basterretxea et al., 2022). In addition, forensic research has found that such increases in

hostility and anger lead to child abuse, concluding that, as a consequence of victimization as two symptoms of PTSD, it exempts women victims of violence from criminal liability (Arce et al., 2009; Bonilla-Algovia & Rivas-Ribero, 2022).

In turn, it has been corroborated that participation in the judicial process may have effects on the psychological health of victims, as established by Therapeutic Jurisprudence (TJ). TJ ultimately aims to enhance therapeutic effects and minimise counter-therapeutic effects (Stolle et al., 1997), seeking to humanise both the law and its application (Novo et al., 2022). The framework with regard to action is not reduced to a set of written rules but includes the legal procedures and the professionals who are part of the process (Fariña, 2022). For this purpose, TJ draws on knowledge from the social, legal and behavioural sciences, while preserving the guarantees of the legal process (Perlin, 2020). The aim is to increase knowledge and scientific evidence within the legal process and, specifically, on the judicial experience of victims of intimate partner violence and the impact of the legal system on their well-being (Sullivan et al., 2022).

Based on the above, a field study was designed with the aim of finding out and quantifying the effects on the psychological well-being of complainants-victims of intimate partner violence during the judicial process of protective orders and assistance orders provided for in Ecuador's legal system.

Method

Participants

A total of 136 women living in Ecuador (97.1 % of Ecuadorian nationality) aged between 18 and 72 years ($M = 37.14$, $SD = 10.87$) who had initiated legal proceedings for intimate partner violence participated in the study. Regarding the relationship with the accused, in 51.4 % ($n = 70$) of the cases it was the ex-husband/husband and in 48.6 % ($n = 66$) the current or former partner/cohabitant.

In terms of relationship to the accused, in 51.4 % ($n = 70$) of the cases it was the ex-husband/husband and in 48.6 % ($n = 66$) the current or former partner/cohabitant. In terms of judicial history, 30.9% of the women ($n = 42$) had previously reported the defendant for intimate partner violence, and 30.9 % ($n = 42$) had other civil court proceedings open (e.g., divorce, alimony).

Design and Procedure

The sensitivity of the design for a contrast of the observed probability of productivity of the judicial measures with a constant (.05, trivial effect) for a sample size of 136 participants and a moderate effect size ($h = 0.50$) was 86.9 %. In case of multivariate analyses (MANOVA), the probability of detecting significant differences ($\alpha < .05$) for a sample size of 136 participants and a moderate effect size ($d = 0.50$) is 97.8 %.

Participants were recruited through services and associations for victims of intimate partner violence in Ecuador. A total of 136 women from the Canton of Cuenca (Ecuador) voluntarily participated in the study and gave informed consent. All interviews were conducted by professionals with previous training and specific training in Therapeutic Jurisprudence and intimate partner violence.

Measurement Instruments

The evaluation of the judicial measures applied to the case was obtained by interviewing the women with a list of the 17 Protective Orders and Assistance Orders provided for in the Comprehensive Organic Criminal Code (COIP, 2014) and the Comprehensive Organic Law for the Prevention and Eradication of Violence against Women (Law 175/2018). Given that the orders are intended for different purposes of protective and assistance to victims, as established by the National System for the Protective and Assistance of Victims, Witnesses and Other Participants, but are not classified as such in the legislation, we proceed accordingly. Thus, protective orders are defined as those aimed at mitigating the risk of reoffending and assistance orders as those aimed at supporting and promoting the health of victims.

Based on these definitions, a group of researchers evaluated each measure, following the Thurstone procedure, on an 11-point scale from fully protective judicial measure (1) to fully assistive measure (1), with a mid-point (6), neither protective nor assistive or both at the same time. In addition, the researchers motivated the evaluation. Concordance in coding as protective or welfare was calculated using the true concordance index (\overline{ICV} ; Arce et al., 2000) inter-evaluators, resulting in perfect ($\overline{ICV} = 1$).

In order to assess psychological well-being, the Spanish adaptation of Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R; Derogatis, 2002). This scale was designed as a measure of psychological symptomatology that includes 90 symptoms distributed in nine dimensions: Somatization (SOM), Obsessive-Compulsive (OBS), Interpersonal Sensitivity (INT), Depression (DEP), Anxiety (ANS), Hostility (HOS), Phobic Anxiety (FOB), Paranoid Ideation (PAR) and Psychoticism (PSI). The measure has a 5-point Likert-type response format in which the respondent reports the level of discomfort caused by the problem: *Not at all* (0); *A little* (1); *Moderately* (2); *Quite a lot* (3); *Extremely* (4).

For the aim of the study, participants were administered the SCL 90-R with instructions for two time points: a pre-trial measure in which respondents were mentally situated as they were before the start of the trial; and a post-trial measure, in which they were instructed to answer about symptoms at the time of the assessment, i.e., after the effects of the trial.

Data Analysis

The productivity of the judicial measures was calculated by obtaining the Z-score for the contrast between the observed prevalence with a trivial prevalence (.05; Gancedo et al., 2021). The effect size was estimated with Cohen's (1988) h , being small ($h = 0.20$), moderate ($h = 0.50$), large ($h = 0.80$) and larger ($h = 1.20$; Fandiño et al., 2015). For the study of the application effects of protective orders, welfare measures and the judicial process on the symptomatic dimensions, a 2 X 2 X 2 mixed model (between- and within-subjects effects) MANOVA

was carried out. The effect sizes of the multivariate analyses were estimated with partial eta squared (η_p^2), being small when $\eta_p^2 = .010$, medium when $\eta_p^2 = .059$ and large when $\eta_p^2 = .138$ (Cohen, 1988). Observed multivariate heterogeneity, if univariate effects were significant ($p < .05$), 3 criteria were checked for validation (Mayorga et al., 2020): (a) that theoretical F ($F = 3.912$) was lower than empirical F ; (b) that the ratio between the false rejection of the null hypothesis and the false acceptance of the null hypothesis (β/α) was ≥ 1 ; and (c) that the magnitude of the effect size was in line with the acceptance of the alternative hypothesis i.e., $d \geq 0.20$. All significant univariate results met these 3 criteria. Univariate effect size for repeated measures was obtained with Cohen's d using Lipsey and Wilson's (2001) formula and Hedges and Olkin's (1985) confidence interval formula. Effect size was categorically interpreted as small ($d = 0.20$), moderate ($d = 0.50$) and large ($d = 0.80$) and the magnitude of clinical symptom reduction was quantified with r (Arias et al., 2020).

Results

Study on the Productivity of Judicial Measures

The results of the prevalence of the implementation of orders (see Table 1) showed a significant prevalence with a larger effect size of prohibiting the accused/convicted person from attending certain places or meetings; prohibiting approaching the victim; prohibiting acts of persecution or intimidation of the victim; and the issuing of a restraining order (safe conduct) in favour of the victim or the victim's entourage. A significant prevalence with a moderate effect size was also observed for the judicial order ordering the accused/convicted person to leave the home or dwelling and the installation of electronic devices. All of them are victim protective orders. Unlike, welfare measures have been implemented with a trivial or null prevalence.

Study of the Effects of Judicial Measures

A MANOVA with a mixed design 2 (within-subject effect: judicial process) X 2 (between-subject effects: implementation of protective orders) X 2 (between-subject effect: implementation of assistance orders) was run, with a customised model (main effects for the factors judicial process –denunciation, confrontation with the aggressor–, implementation of judicial protective orders, and implementation of judicial assistance orders; and the interaction of the judicial process factor with the factors implementation of judicial protective orders and implementation of judicial assistance orders) was carried out.

The results reported a significant multivariate effect, $F(9, 125) = 3.37, p = .001$, of the judicial process factor (within-subject), with an observed power of 98.1 %, $1 - \beta = .981$, and a large effect size ($\eta_p^2 = .195$). The inter-subject factors application of protective orders (yes vs. no), $F(9, 125) = 1.01, p = .453$, and assistance (yes vs. no), $F(9, 125) = 0.99, p = .453$, did not show a significant effect on psychological adjustment. Likewise, the interaction between judicial process (within-subjects effects) and the application of protective orders (between-subjects effects), $F(9, 125) = 1.45, p = .173$, and the application of assistance orders to the victim, $F(9, 125) = 1.37, p = .211$, were not significant either. The application of protective and assistance orders for the victim are independent of the effect of the judicial process.

The univariate effects (see Table 2) for the judicial process factor showed a positive clinical effect (clinical improvement) and significant and large effect size ($d \geq 0.80$) in somatization, obsessive-compulsive, interpersonal sensitivity, depression, anxiety (generalised anxiety), phobic anxiety and paranoid ideation; and moderate to large effect size ($0.50 \leq d < 0.80$) in the dimensions hostility and psychoticism. In therapeutic terms, these effects represent an improvement (decrease in symptoms) of 41.4 % ($r = .414$) in somatization, 44.4 % ($r = .444$) in obsessive-compulsive, 38.7 % ($r = .387$) in interpersonal sensitivity, 45.4 % ($r = .454$) for depression, 47.5 % ($r = .475$) for anxiety, 30.0% ($r = .300$) for hostility, 38.3 % ($r = .383$)

for phobic anxiety, 42.5 % ($r = .425$) for paranoid ideation, and 32.6 % ($r = .326$) for psychoticism.

Discussion

First of all, the study confirms the restorative and therapeutic effect on women who report intimate partner violence of confronting the aggressor through the judicial process, producing a significant and large magnitude improvement in their well-being. This effect occurs both at the global level of mental health, with a large magnitude, and in all the symptomatology scales studied, with effect sizes between moderate and large; especially in the dimensions of depressive, anxious and obsessive-compulsive symptomatology, which include PTSD symptoms (e.g., re-experiencing, negative cognitive alterations, mood alterations, increased arousal; APA, 2013). Forensic psychology identifies psychological harm through PTSD (Arce et al., 2015), characterised by the recurrence and intensification over time of its symptoms, with a tendency to become chronic in response to memories of the original trauma or new stressors; therefore, all factors that reduce symptoms and contribute to overcoming the traumatic experience are of particular relevance. These results are consistent with previous studies that conclude about the improvement in the state of health and quality of life (Cattaneo and Goodman, 2010) of women after turning to the justice system, especially when legal operators act with an FT approach. In addition, there is a moderate reduction of more than 38% in the hostility dimension, in line with previous research (Clements et al., 2022; Vilariño et al., 2018).

In a second term, it is concluded that the implementation of Protective Orders does not have a significant effect on the health and well-being of victims of intimate partner violence. This result contributes to shed light on the existing contradictory results about POs, which concluded in line with the lack of significant effects or small effect sizes compared to when they were not applied (Brame et al., 2015; Calton & Cattaneo, 2014; Cordier et al., 2021; Dowling et al., 2018). One possible explanation for the results obtained by Sullivan et al. (2021), is that their studies address the comparison of different levels of restraint, but

do not take into account the comparison with the non-application of POs, nor do they control for the effects of the judicial process itself, unlike the present study. Hence, the results reveal the relevance of the experience of women who report intimate partner violence during the judicial process, in relation to their well-being and to fostering a positive experience where its therapeutic effects are enhanced (Arce et al., 2023). This is the aim pursued by Therapeutic Jurisprudence (TJ), which point out that this therapeutic or counter-therapeutic effect of the judicial process will not only lie in the laws, but also in how the procedures are applied and how the professionals of the legal system act (Fariña, 2022; Wexler & Winick, 1996). A judicial process in which a TJ approach is used will allow for better coping on the part of the victim, less abandonment, and is therefore likely to produce significant benefits for victims (Cattaneo & Godman, 2010).

In a third term, the results regarding the application of OPs defined in Ecuadorian jurisprudence (COIP, 2014; Law 175/2018); allow us to conclude that only 6 of the 17 POs are applied in a significant way, with effect sizes between moderate and more than large. All significant orders fall into the category of protective orders, i.e., those applied to mitigate the risk of re-offending. Notwithstanding, no significant application of some assistance orders, i.e. those aimed at restoring the harm received and facilitating the complainants' livelihood, was found. This implies that the application of POs in Ecuador is being directed exclusively at those orders that seek to prevent re-offending and further violence, despite research reporting that they are unable to fully mitigate re-offending and revictimisation (Brame et al., 2015; Cordier et al., 2021; Dowling et al., 2018; Logan and Walker, 2009).

Within the assistance orders, only one of them (fixing a pension) has a direct economic purpose and two of them (inventory of movable or immovable property and provision for flexibility or reduction of working hours) have implications for the economic support of the complainants, none of them being applied to any significant extent. These types of orders, framed as assistance orders, could facilitate legal action, and reduce abandonment during the process, as established by the theory of marital dependency (Kalmuss & Straus, 1982). Consequently, the development of economic assistance orders that enable the

empowerment and autonomy of women contributes to the abandonment of the dependency relationship and to being able to participate in the legal process without losing economic support.

The limitations of this study should be taken into account. Firstly, the assessment of the psychological state prior to the judicial process was carried out by mentally reinstating the interviewer at that moment in time, which may affect the results. On the other hand, comparisons are made between naturally generated groups, based on the application or non-application of protective orders. Likewise, the effect of some of the protective orders, although they could be relevant, could not be evaluated due to the low frequency of application of this order. Finally, it should be borne in mind that the research is carried out in the social and legal context of Ecuador, so the results obtained refer only to the orders included in its legislation.

© 2023. This work is published under
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>(the “License”).
Notwithstanding the ProQuest Terms and Conditions, you may use this
content in accordance with the terms of the License.